



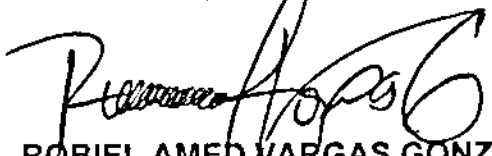
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
 San José de Cúcuta, veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-004-2013-00683-01
 Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 Accionante: Myriam García García
 Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

D. X. estado
 13-51
 12 ABR 2018




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
San José de Cúcuta, veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)


Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-01074-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Gloria Cecilia Sánchez
Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Departamento Norte de Santander.

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED WARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

 X ESTADO
Nº 51.
02 ABR 2018



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
San José de Cúcuta, veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

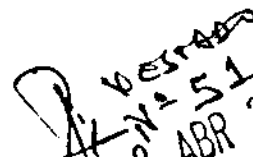
Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-01277-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Gabriel García Tarazona
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el término de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMÉD VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO


Nº 51
10.2 ABR 2018



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
 San José de Cúcuta, veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-01078-01
 Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 Accionante: Inés María Arroyo Arias
 Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Departamento Norte de Santander

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

D x ESTADO
 N° 51
 22 ABR 2018



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
San José de Cúcuta, veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2015-00273-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Alba Marina Rojas Ordoñez
Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

RECEBIDO
Nº 51
02 ABR 2018



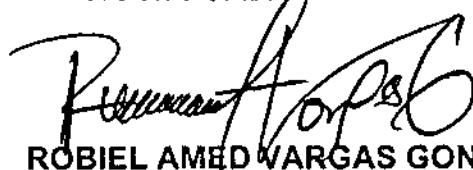
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
San José de Cúcuta, veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-01001-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Blanca Belén García Acevedo
Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Departamento Norte de Santander

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMÉD VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

EXESTADO
Nº 51
22 ABR 2018



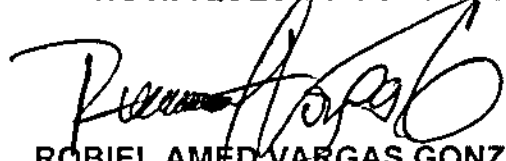
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
 San José de Cúcuta, veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-004-2015-00230-01
 Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 Accionante: Yosele Contreras Trujillo
 Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

D x ESTADO
 N° 51
 2 ABR 2018



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
 San José de Cúcuta, veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-004-2015-00247-01
 Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 Accionante: Fany Nereyra Mogollon Álvarez
 Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Fondo de Prestaciones Sociales
 del Magisterio-Departamento Norte de Santander.

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZALEZ
MAGISTRADO

X ESTADO
 N° 51.
 22 ABR 2018



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
San José de Cúcuta, veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-004-2014-01412-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Alix Nidia Reyes Beltran
Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio-Departamento Norte de Santander.

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

RECEBIDO
Nº 51
22 ABR 2018



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
San José de Cúcuta, veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-01068-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Jaime Hernando Rolón Gélvez
Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Departamento Norte de Santander

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL ANED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

2 XESTADO
Nº 51
02 ABR 2018



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
 San José de Cúcuta, veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-004-2015-00216-01
 Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 Accionante: Doris Yazmin Vargas Arias
 Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Fondo de Prestaciones Sociales
 del Magisterio-Municipio de San José de Cúcuta-
 Departamento Norte de Santander.

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

X ESTADO
 N° 51.
 12 ABR 2018



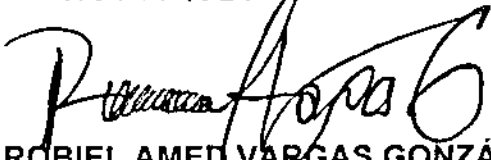
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
 San José de Cúcuta, veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

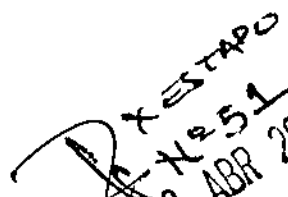
Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-004-2015-00225-01
 Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 Accionante: Elizabeth Rojas Barrientos
 Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Fondo de Prestaciones Sociales
 del Magisterio-Municipio de San José de Cúcuta.

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO


Nº 51
02 ABR 2018



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2015-00231-01

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho


Accionante: William León Peña

Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

Recibido
 N° 51,
 12 ABR 2018



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Magistrado Sustanciador: **Dr. EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI**

Radicado:	54-001-23-33-000-2017-00426-00
Accionante:	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Demandado:	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Medio De Control:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Visto el informe secretarial que antecede, procederá el Despacho a fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de dicho cuerpo normativo, razón por la cual se dispone:

1. **FIJAR** como fecha y hora para llevar a cabo **AUDIENCIA INICIAL** dentro del proceso de la referencia el día **18 de abril de 2018, a partir de las 3:00 P.M.**, siendo de carácter **obligatorio** la asistencia a la misma de los apoderados que ejercen representación en esta controversia.
2. Se advierte que en el entendido que esta providencia se notifica por estados electrónicos (conforme lo indica el numeral 1 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011) y se comunica a los correos electrónicos suministrados por las partes y demás intervinientes, no se libran boletas de citación a los sujetos procesales intervinientes, sin que ello se constituya como una excusa para la inasistencia a tal audiencia.
3. Visto el memorial en folios 319-320 del expediente, **ACEPTAR** la renuncia de la abogada Claudia Patricia Barrera Vélez, como apoderada del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
4. A su vez, **RECONOCER** personería al abogado Luis Eduardo Agudelo Jaramillo como apoderado del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, en los términos y para los efectos del poder obrante en folio 307 del plenario.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI
Magistrado.-

Despacho
Nº 51
02 ABR 2018



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, veintidós (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Magistrado Sustanciador: **Dr. EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI**

EXPEDIENTE:	54-001-33-33-001-2014-01430-01
DEMANDANTE:	LUZ ANGELA GARCÍA DE DUARTE
DEMANDADO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Corresponde resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la decisión adoptada por el **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta**, en audiencia inicial adelantada el día 4 de agosto de 2017, en cuanto a decretar probada de oficio la excepción previa de inepta demanda.

I. El Auto Apelado

Se trata del pronunciamiento por medio del cual se decretó probada de oficio la excepción previa que trata el numeral 5 del artículo 100 del CGP, relacionada con la inepta demanda respecto de las pretensiones consistentes en declarar la nulidad parcial de las Resoluciones 004892 del 6 de febrero de 2006, 33834 del 11 de julio de 2007, 01211 del 21 de enero de 2009, PAP 006714 del 19 de julio de 2010 y PAP 026485 del 16 de noviembre del mismo año (fls. 219 a 223).

En el auto recurrido, el Juzgado de primera instancia señaló que la pretensión de la demandante se refiere a la reliquidación de su pensión con el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante el último año de prestación de servicios, al considerar que su caso particular se deben aplicar las Leyes 33 y 62 de 1985 que regulan el aspecto pensional del sector público; y además aduce ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Las resoluciones anteriormente especificadas, indicó el *A quo*, no versan sobre el fondo del asunto del caso concreto, puesto que la Resolución 004892 del 6 de febrero de 2006 concedió la pensión a la demandante en razón de la solicitud elevada por ella misma a la entidad CAJANAL EICE -en liquidación-. Posteriormente, la Resolución 33834 del 11 de julio de 2007 negó la reliquidación pretendida donde se solicitaba la inclusión de nuevos tiempos de servicio.

Luego resalta que la peticionaria al no estar de acuerdo con la decisión adoptada el 11 de julio, interpuso en su contra recurso de reposición, pues consideraba que su pensión debía ser liquidada con fundamento en el 85% del ingreso base de liquidación y con todos los factores salariales de acuerdo con las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, tesis que fue acogida parcialmente por la entidad, quien en Resolución 01211 del 21 de enero del 2009 revocó la Resolución 33834, y reliquidó su pensión basado en los artículos 33, 34 y 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, con el 85% del promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de servicio, y únicamente tomando en cuenta los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994.

Así mismo, comenta que en las Resoluciones PAP 006714 y PAP 026485 del 19 de julio y 16 de noviembre de 2010, se resolvió la petición de reliquidación de la demandante, quien insistía que se efectuara con fundamento en el 85% del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios. Según lo anteriormente planteado, concluye el *A quo* que no es posible cuestionar la legalidad de dichos actos en este proceso, por cuanto las pretensiones y fundamentos jurídicos con que se edificó la demanda, difieren de lo expuesto en las resoluciones señaladas.

Por lo tanto, se declaró probada la excepción previa de inepta demanda respecto de las pretensiones que pretenden la nulidad parcial de las resoluciones anteriormente individualizadas y continuar con el trámite normal del proceso sobre las pretensiones que pretenden la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. RDP 014285, RDP 020530 y RDP 022740, del 22 de marzo, 6 de mayo y 20 de mayo de 2013, las cuales si versan sobre el asunto de fondo del caso concreto.

II. El Recurso Interpuesto

La apoderada de la parte demandante argumenta el recurso de apelación, aduciendo que independiente de la petición que realizó su representada a la entidad para la reliquidación de su pensión, en todos los actos administrativos que indica el *A quo* como susceptibles de la excepción de inepta demanda, siempre se hacía referencia en aquellos actos administrativos, que la actora era beneficiaria del régimen de transición y así mismo se citaba la Ley 33 de 1985.

Por ende, la apoderada considera que los actos administrativos que el *A quo* declara son objetos de inepta demanda, si toman en consideración la situación de la demandante en base al régimen de transición que se estima, puesto que ellos respondían a las solicitudes que interponía su representada para que a su pensión se le añadieran los factores salariales que consideraba debían ser computados en razón de la reliquidación de su pensión.

III. Traslado del recurso

El apoderado de la entidad demandada manifiesta encontrarse de acuerdo con la decisión adoptada por el *A quo* y agrega no considerar pertinente que se sorprenda a la administración con nuevas pretensiones las cuales no fueron objeto de revisión previamente.

IV. Consideraciones

4.1 Procedencia, oportunidad y trámite del recurso

El artículo 125 del CPACA establece que la competencia para proferir autos interlocutorios de única, primera o segunda instancia, reside en el Magistrado Ponente, a excepción de los que rechazan la demanda, los que decreten una medida cautelar o resuelven incidentes de responsabilidad y desacato en el mismo trámite, los que ponen fin al proceso y los que aprueben conciliaciones extrajudiciales o judiciales.

En la audiencia inicial, el Juzgado de primera instancia declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda correspondiente a sólo una parte de los actos administrativos demandados, ya que éstos no se refieren al fondo del litigio en el caso concreto; no obstante, se realizó la salvedad de que el proceso debe continuar su trámite ordinario respecto de las demás pretensiones que pretenden la nulidad parcial de los actos administrativos que en su criterio definen el fondo del asunto planteado por la actora en el actual proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Tal decisión notificada en estrado a las partes, resulta susceptible de recurso de apelación, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 180 del CPACA¹, y la competencia para su decisión recae únicamente en el Magistrado Ponente, puesto que en el presente caso, la declaración de inepta demanda no finalizó el litigio, sino que se declaró probada la excepción respecto de algunos actos administrativos demandados.

De acuerdo a lo anterior, sumado a que la decisión adoptada es susceptible del recurso de apelación en efecto suspensivo, y habiéndose interpuesto y sustentado el mismo en la oportunidad correspondiente, esto es, en la audiencia inicial, pasará el suscrito Magistrado Ponente a resolver la alzada.

4.2. Algunas precisiones sobre la excepción previa de inepta demanda

El ordenamiento jurídico colombiano² consagra de manera expresa la excepción previa denominada "*Ineptitud de la demanda*", encaminada fundamentalmente a que se adecúe la misma a los requisitos de forma que permitan su análisis en sede judicial, so pena de la terminación anticipada del proceso.

Esta se configura (i) por falta de los requisitos formales cuando no se reúnen los requisitos relacionados con el contenido y anexos de la demanda regulados en los artículos 162, 163, 166 y 167 del CPACA en cuanto indican qué debe contener el texto de la misma, cómo se individualizan las pretensiones y los anexos que se deben allegar con ella (salvo los previstos en los ordinales 3 y 4 del artículo 166 ibídem³ que tienen una excepción propia prevista en el ordinal 6 del artículo 100 del CGP⁴), y (ii) por indebida acumulación de pretensiones, la cual surge por la inobservancia de los presupuestos normativos contenidos en los artículos 138⁵ y 165⁶ del CPACA.

¹ "El auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso".

² Ordinal 5 del artículo 100 del Código General del Proceso.

³ "...3. El documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título.

4. La prueba de la existencia y representación en el caso de las personas jurídicas de derecho privado. Cuando se trate de personas de derecho público que intervengan en el proceso, la prueba de su existencia y representación, salvo en relación con la Nación, los departamentos y los municipios y las demás entidades creadas por la Constitución y la ley. {...}"

⁴ "...6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar. {...}"

⁵ ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.

⁶ ARTÍCULO 165. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. En la demanda se podrán acumular pretensiones de nulidad, de nulidad y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que sean conexas y concurren los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando en la demanda se afirme que el daño ha sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y de un particular, podrán acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción Contencioso Administrativa será competente para su conocimiento y resolución.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.
3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.
4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento.

En cuanto a la exigencia de demandar en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es de indicar que el artículo 162 del CPACA, dispone que el escrito de la demanda debe contener "Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularan por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones" y el artículo 163 ibidem dispone que *"Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron"*.

4.3. Caso en concreto

En el *sub - lite*, revisada la demanda, se advierte que las pretensiones están encaminadas principalmente a obtener la declaratoria de la nulidad parcial de las Resoluciones 004892 del 6 de febrero de 2006, 33834 del 11 de julio de 2007, 01211 del 21 de enero de 2009, PAP 006714 del 19 de julio de 2010, PAP 026485 del 16 de noviembre de 2010, 014285 del 22 de marzo de 2013, 020530 del 6 de mayo de 2013 y 022740 del 20 de mayo de 2013, todas emanadas de CAJANAL EICE -en liquidación-, y que como consecuencia de ello, se ordene efectuar una nueva reliquidación de la pensión de vejez a favor de la señora LUZ ANGELA GARCÍA DE DUARTE, teniendo en cuenta como factores de liquidación todos los conceptos que se constituyen salario, con efectividad a partir del 1 de junio de 2006 y con los reajustes anuales que dispone la Ley 100 de 1993.

Visto el contenido de dichos actos, se advierte que, en efecto, mediante Resolución 004892 del 6 de febrero de 2006 (fls. 12 a 17), se dispuso ordenar el reconocimiento y pago en favor de la señora LUZ ANGELA GARCÍA DE DUARTE, pensión mensual vitalicia de vejez efectiva a partir del 1 de mayo de 2005 y condicionada en su pago al retiro definitivo del servicio. La pensión se liquidó con base en el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años, conforme lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, entre el 1 de mayo de 1995 y 30 de abril de 2005.

Del mismo modo, se tiene que por medio de Resolución 33834 del 11 de julio de 2007, CAJANAL EICE -en liquidación- dispuso negar petición de reliquidación pensional de la prenombrada, en el sentido de aplicarle el régimen de transición y liquidarla con todos los factores salariales y el 85%; contra tal acto administrativo, la demandante presentó recurso de reposición, el cual fue desatado mediante Resolución 01211 del 21 de enero de 2009, la cual revocó la resolución recurrida, y en su lugar, se liquidó la pensión de acuerdo con los artículos 33, 34 y 21 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta el 85% del promedio de lo devengado entre el 1 de junio de 1986 al 30 de mayo de 2006 (fls. 19 a 29).

De igual manera, se aprecia que CAJANAL EICE -en liquidación-, por medio de las Resoluciones PAP 006714 del 19 de julio de 2010 y PAP 026485 del 16 de noviembre de 2010, se pronunció en forma negativa acerca de la solicitud elevada por la señora LUZ ANGELA GARCÍA DE DUARTE, en el sentido reliquidar su pensión con el 85% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios (fls. 30 a 44).

Tal y como se viene de corroborar, la pretensión de restablecimiento de derecho incoada en la demanda, consiste en la reliquidación de su pensión con el **75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante el último año de prestación de servicios**, considerando que a su caso particular se deben aplicar las Leyes 33 y 62 de 1985, que regulan el aspecto pensional del sector público y así mismo aduce ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En ese orden de ideas, es claro que los actos administrativos que resolvieron las peticiones encaminadas a obtener una reliquidación pensional tomando el 85% del ingreso base de liquidación, no concuerdan con lo exactamente pretendido por la parte demandante, por tanto, se encuentra ajustada a derecho la decisión del *A quo* de declarar probada de oficio la excepción de inepta demanda, respecto a las Resoluciones PAP 006714 del 19 de julio de 2010 y PAP 026485 del 16 de noviembre de 2010.

En consecuencia, lo procedente es continuar el trámite procesal en lo concerniente al estudio de legalidad de las Resoluciones 014285 del 22 de marzo de 2013, 020530 del 6 de mayo de 2013 y 022740 del 20 de mayo de 2013, en las cuales, CAJANAL EICE -en liquidación- se pronunció frente a la solicitud de la peticionaria encaminada a que se reliquidara la mesada pensional de la cual es beneficiaria, con base en el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios con inclusión de todos los factores salariales, y que corresponde con la pretensión de restablecimiento del derecho impetrada en el libelo demandatorio.

Por las anteriores razones, se confirmará la decisión apelada y se ordenará devolver el expediente para que el proceso continúe su curso legal.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, dictado en audiencia inicial adelantada el día 4 de agosto de 2017, en cuanto decretó probada de oficio la excepción previa de inepta demanda, en relación con las pretensiones encaminadas a obtener la declaratoria de nulidad parcial de las Resoluciones 004892 del 6 de febrero de 2006, 33834 del 11 de julio de 2007, 01211 del 21 de enero de 2009, PAP 006714 del 19 de julio de 2010 y PAP 026485 del 16 de noviembre de 2010, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen, previa las anotaciones secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


EDGAR ENRIQUE BERNAL JÁUREGUI
Magistrado.-

X ESTADO
de N.º 51.
2 ABR 2018



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
San José de Cúcuta, veintidós (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Medio de Control:	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado No:	54-001-33-33-004-<u>2015-00461</u>-01
Demandante:	Eliécer Quintero Gutiérrez
Demandado:	Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL

En atención al informe secretarial que antecede, procede el Despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, en contra de la decisión proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, en la continuación de la audiencia inicial celebrada el día 29 de septiembre de 2017, mediante la cual se declaró probada de oficio la excepción denominada *"no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios"* y por tanto ordenó la vinculación de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional como litisconsorte necesario de la parte pasiva, conforme lo siguiente:

I. Antecedentes

1.1.- El Auto apelado

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta, en la continuación de la audiencia inicial celebrada el día veintinueve (29) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) (fl. 102), decidió declarar probada de oficio la excepción denominada *"no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios"* y por tanto ordenó vincular a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional como litisconsorte necesario de la parte accionada, bajo los siguientes argumentos:

El A quo indicó que como lo pretendido en la demanda es la reliquidación de la asignación de retiro, dispuesta en el inciso segundo del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000, (al trasladarse el señor Eliécer Quintero Gutiérrez de soldado voluntario a profesional), y dicha pretensión conlleva a que se deba vincular al presente proceso como litisconsorte necesario a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 100 de la Ley 1564 de 2012, el cual consagra como excepción previa *"no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios"*, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1564 de 2012.

Por último, señaló que si bien la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares tiene como función específica el reconocimiento de la asignación de retiro, no tiene la competencia en relación con los salarios devengados por el demandante en actividad, los cuales únicamente corresponden a la Nación- Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

1.2.- Fundamentos del recurso interpuesto

El apoderado de la parte demandante, en el transcurso de la audiencia inicial (fl. 102), presentó recurso de apelación en contra la decisión del Juzgado que declaró probada la excepción denominada *"no comprender la demanda a todos los"*

litisconsortes necesarios", y por tanto vinculó a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, conforme a los siguientes argumentos:

Expone que como los actos administrativos con Radicado Nos. 0006607 del 5 de febrero de 2015 y 0014592 del 9 de marzo de 2015, fueron proferidos por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, es ésta la entidad la que se encuentra legitimada para comparecer al proceso, ya que fue la que negó el reconocimiento de la asignación de retiro del actor, motivo por el cual solicita la no vinculación del Ministerio de Defensa.

1.3.- Traslado del recurso

1.3.1. Parte demandada:

El apoderado de la parte demandada en el uso de la palabra manifestó no estar de acuerdo con lo alegado por el apoderado de la parte actora, al solicitar la no vinculación del Ministerio de Defensa, dado que es indispensable su vinculación como litisconsorte necesario, pues si bien la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares es quien reconoció la asignación de retiro del accionante, dicho reconocimiento lo hace con base en la hoja de servicios expedida por el Ministerio de Defensa.

1.4.- Concesión del recurso.

Durante el trámite de la audiencia inicial celebrada el 29 de septiembre de 2017, obrante a folio 102 del expediente, el Juzgado Cuarto Administrativo de Oral de Cúcuta, concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandante, por ser procedente conforme a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 244 de la Ley 1437 de 2011.

I. Consideraciones

2.1.- Competencia

Este Despacho tiene competencia para decidir en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto, con fundamento en lo reglado en el art. 125 de la Ley 1437 de 2011, dado que el presente auto no es de aquellos que deban ser resueltos por la Sala, pues se trata de la decisión que declaró probada una excepción de integración de un Litis consorcio necesario.

Igualmente, la decisión de declarar probada la excepción de no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, es apelable conforme lo reglado en el numeral 6° del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.

2.2. El asunto a resolver en esta Instancia:

Debe el Despacho decidir si hay lugar a revocar la decisión tomada por el A quo, el día 29 de septiembre de 2017, durante la continuación de la audiencia inicial, que resolvió declarar probada de oficio la excepción previa denominada "*no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios*", tal como lo solicita el apoderado de la parte actora.

En el presente asunto el A quo llegó a tal decisión por considerar que la pretensión que se perseguía en la demanda de la referencia, conllevaba a que fuese necesaria la vinculación de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, dado que dicha entidad es quien estableció los salarios devengados por el accionante en actividad, cuyo sustento sirve a la pretensión de reliquidación de la asignación de retiro aquí formulada.

Así mismo, señaló que CREMIL tiene una función específica, la cual es el reconocimiento de la asignación de retiro y que no tiene competencia alguna en relación con los valores devengados por el accionante en actividad, asegurando que este asunto le compete al empleador, es decir, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

Inconforme con la decisión de primera instancia, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación, indicando que los actos administrativos demandados fueron emitidos por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y que por tanto es ésta entidad la que se encuentra legitimada para comparecer en el proceso y no la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

2.3.- Decisión del presente asunto en segunda Instancia.

Este Despacho, luego de analizada la providencia apelada, los argumentos expuestos en el recurso de apelación y el ordenamiento jurídico pertinente, llega a la conclusión que en el presente asunto se deberá revocar la decisión emitida por el A quo de declarar probada de oficio la excepción denominada "*no comprender la demanda a todos los Litisconsortes necesarios*", con base en los siguiente argumentos:

1º.- Como es sabido en el artículo 227 de la ley 1437 de 2011 (CPACA), se establece que en lo no regulado en dicho código sobre la intervención de terceros, se aplicarán las normas de Código de Procedimiento Civil, hoy el Código General del Proceso.

En el Capítulo X del CPACA, sobre Intervención de Terceros, no se regula concretamente el tema del Litis consorcio necesario en los procesos que se siguen bajo el CPACA. Por lo anterior, debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 61 del C.G.P., en punto de la configuración de un Litis consorcio necesario en los procesos regidos por este sistema de oralidad mixto.

De tal suerte que el Litis consorcio necesario se presenta cuando el proceso versa sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, deben de resolverse de manera uniforme para todas las personas que sean sujetos de tales relaciones y por tanto no se puede dictar sentencia de mérito sin la presencia de todas aquellas. En tal caso, la parte actora debe demandar a todas las personas las personas que sean sujetos de tales relaciones jurídicas, y en su defecto, el Juez debe en el auto admisorio vincular de oficio a todas las personas, o en auto posterior antes de proferirse sentencia de primera instancia.

2º.- En el presente caso el demandante solamente dirige la demanda en contra de la Caja CREMIL, solicitando la nulidad de los actos administrativos contenidos en los oficios Nos. 0006607 del 05 de febrero de 2015, mediante el cual se negó el reajuste de la asignación de retiro del señor Quintero Gutiérrez y 0014592 del 09 de marzo de 2015, a través de la cual se resolvió recurso de apelación, actos que fueron expedidos por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

Como restablecimiento del derecho solicita *se condene a LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, al reconocimiento y pago del reajuste de la asignación de retiro a que tiene derecho.*

En estas circunstancias, estima el Despacho que en el presente asunto no resulta aplicable la figura del Litis consorcio necesario declarada por el A quo, quien ordenó vincular a la Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, como Litis consorte necesario de la parte demandada.

Y estima este Despacho que no es procedente la aplicación de tal figura en el presente asunto, dado que de una parte, el accionante solamente decide demandar a CREMIL, en ejercicio de su derecho de determinar cuál es la parte demandada, y del otro, por cuanto no es posible sostener que en el presente asunto no se pueda proferir sentencia de mérito sin la comparecencia de la Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional.

Para el Despacho es claro que en el presente asunto sí es posible dictar sentencia de mérito con la sola comparecencia de la Caja CREMIL, ya que dicha entidad fue la que expidió los actos demandados, y para estudiar la existencia de las causales de anulación de tales actos que propone la parte actora, no es necesario que comparezca la Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional.

Amén de lo anterior, la Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional no tiene pretensiones sobre las cuales ejercer el derecho de defensa, por lo cual resulta imposible que pueda ejercer el derecho de defensa, respecto de pretensiones inexistentes en su contra.

El Despacho estima que en casos como el presente, resulta improcedente la aplicación de la figura del Litis consorcio necesario, ya que en procesos como el presente donde se estudia la legalidad o no de unos actos administrativos proferidos por una persona jurídica de derecho público, solamente es necesario traer como parte demandada a la entidad que expide tales actos, pues es sabido que la característica esencial del acto administrativo es que es de naturaleza unilateral.

El criterio que sostiene este Despacho, encuentra apoyo, en lo decidido por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de fecha 09 de marzo de 2017¹, en la cual se decidió un caso idéntico al presente, donde se solicitaba en la demanda la nulidad de unos actos administrativos proferidos por CREMIL y luego de anularse tales actos se emitieron condenas únicamente a cargo de la Caja CREMIL, sin que hubiese sido necesario traer a la Nación - Ministerio de Defensa como parte demandada. En efecto, las pretensiones en tal caso eran las siguientes:

"Pretensiones²

«[...] 1.- Se declare la nulidad de los actos administrativos conformados por los Oficios 20635 de 4 de mayo de 2012, en virtud del cual se negó el reajuste de la asignación de retiro devengada por el demandante y el No. 34908 de fecha 19 de julio de 2012, mediante el cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión inicial, quedando debidamente agotada la vía gubernativa.

2.- Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago a favor del demandante del reajuste de la asignación de retiro a que tiene derecho con fundamento en las siguientes causales:

2.1.- Reajuste por indebida aplicación del artículo 16 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, en concordancia con lo señalado en el artículo 13.2.1 de la misma norma y en el inciso segundo del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 toda

¹ Sentencia del 09 de marzo de 2017, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P William Hernández Gómez.

² Folio 44 y vuelto

vez que se incurre en error al efectuar el cálculo del valor de la asignación por retiro al tomar equivocadamente los factores y porcentajes a liquidar afectando doblemente la prima de antigüedad."

Las pretensiones del presente caso son similares a las anteriores, pues se trata de un soldado que pasó de ser soldado voluntario a soldado profesional, por lo que solicita un reajuste en su asignación básica de retiro.

En la parte resolutive del citado fallo proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado se decidió lo siguiente:

"Primero: Modificar el ordinal 3.º de la sentencia proferida el 31 de marzo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Risaralda que accedió a las pretensiones de la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por el señor Luis Aníbal Clavijo Velásquez contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, el cual, quedará así:

«[...] 3.- Como consecuencia de la anterior declaración, se condena a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares a pagar en favor del señor Luis Aníbal Clavijo Velásquez el reajuste de su asignación de retiro en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1794 de 2000, artículo 1.º, inciso segundo, por el período comprendido entre el 13 de mayo de 2009 hasta el momento en que se disponga el cumplimiento de la presente providencia, así:

- Tomar como base una asignación mensual equivalente al 70% del salario mensual (un salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%), con la inclusión del subsidio familiar.
- Al resultado anterior se le adiciona un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad, en el entendido que el porcentaje de la prima de antigüedad debe calcularse a partir del valor del ciento por ciento del salario mensual [...]

Segundo: Ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares actualizar las sumas que resulten a favor de la demandante, con base en la fórmula que se indica en esta providencia.

Tercero: Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia."

Además de todo lo expuesto, el Despacho recuerda que conforme lo dispuesto en el numeral 3.10. del artículo 3º de la Ley 923 de 2004, es la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares la competente para decidir sobre el reconocimiento y reajustes de la asignación de retiro de los miembros de las fuerzas militares:

"3.10. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional serán las entidades responsables de las labores de administración de aportes, reconocimiento y pago de asignaciones de retiro y de sus sustituciones, así como de la inversión, manejo y control de los recursos correspondientes." (Subraya y resalta el Despacho).

En virtud de todo lo expuesto, es claro para el Despacho que en el presente asunto no resulta necesaria la vinculación de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para que esta Jurisdicción pueda proferir una decisión de fondo en el presente proceso, ya que las pretensiones de la demanda solo van dirigidas en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, y esta entidad quien profirió los actos administrativos que aquí se demandan y por disposición legal la competencia para el reconocimiento y reajuste de asignación de retiro de los miembros de las fuerzas militares le corresponde a la Caja CREMIL y no a la Nación- Ministerio de Defensa.

Amén de que como ya se precisó, la Sección Segunda del Consejo de Estado en un caso similar al presente solamente profiere condenas de reajuste de una asignación de retiro de un soldado profesional y pago de diferencias, a cargo de CREMIL, sin que haya sido vinculada la Nación- Ministerio de Defensa. Es claro que el hecho de que el manejo de los salarios del actor durante el tiempo que estuvo en actividad le correspondió a la Nación- Ministerio de Defensa, ello por sí solo no es argumento válido para concluir que en el presente caso deba vincularse a dicha entidad como litisconsorte necesario de la parte pasiva, puesto que en el presente asunto no se discute la legalidad de ningún acto administrativo proferido por la Nación- Ministerio de Defensa, sino solamente de actos emitidos por la Caja CREMIL, la cual es una persona jurídica diferente de la Nación.

En consecuencia, el Despacho estima que le asiste razón a la parte demandante en lo expuesto en el recurso de apelación, y por tanto lo procedente es revocar la decisión adoptada por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta en la audiencia inicial, al declarar probada la excepción denominada "*no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios*".

RESUELVE:

PRIMERO: Revocar la decisión adoptada en audiencia inicial del veintinueve (29) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cúcuta, para en su lugar declarar no probada la excepción denominada "*no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios*", por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen para que se continúe con el trámite del proceso, previas las anotaciones secretariales a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZALEZ
Magistrado

RECEBIDO
Nº 51
20 2 ABR 2018



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Magistrado Sustanciador **EDGAR ENRIQUE BERNAL JÁUREGUI**
San José de Cúcuta, veintidós (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

RADICADO	Nº 54-001-33-33-002-2015-00339-01
ACCIÓN	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE	GERSON CARRILLO SALAZAR
DEMANDADO	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER - IDS -

Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto en contra del auto proferido en audiencia inicial de fecha 27 de julio de 2017, por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Circuito de Cúcuta, en cuanto decidió la excepción propuesta de "falta de integración del litisconsorcio necesario".

1.- EL AUTO APELADO

Dentro de la audiencia inicial adelantada el 27 de Julio de 2017, se resolvieron las excepciones propuestas por el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD -IDS-, entre las que se destaca la de "falta de integración del litisconsorcio necesario", la cual el *A quo* declaró que no prosperaba, pues según el material probatorio allegado al proceso, se aprecia que entre la Unidad Administrativa Especial de Campañas Directas adscritas al Ministerio Nacional de Salud y la entonces Dirección Seccional de Salud hoy IDS, se suscribió un contrato inter-administrativo con el objeto de que se asumiera por parte de la Dirección Seccional de Salud, las funciones que venía cumpliendo la Unidad Administrativa Especial de Campañas Directas, relacionadas con la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores, disponiéndose de igual forma en la cláusula tercera del mismo, que la Dirección Seccional de Salud asumirá las obligaciones prestacionales del personal proveniente de la citada unidad.

Debido a lo anteriormente expuesto, concluyó que a partir de la suscripción de dicho contrato y la posterior expedición de la Resolución 4759 del 28 de diciembre de 1995, *"por el cual se hacen unas incorporaciones en el Plan de cargos al Servicio Seccional de la Salud de Norte de Santander"*, el IDS asumió en su totalidad las obligaciones prestacionales de los empleados incorporados – demandantes - provenientes de la Unidad Administrativa Especial de Campañas Directas.

Así mismo, esbozó que el IDS, de conformidad con la Ordenanza 0018 del 18 de julio de 2003, es un establecimiento público de orden departamental que cuenta por personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, razón por la cual, cuenta con la capacidad jurídica procesal para responder por las resultas del proceso sin que exista la necesidad de que concurren otras entidades.

2.- EL RECURSO DE APELACIÓN Y TRASLADO DEL RECURSO.

En cuanto a la decisión de declarar no probada la excepción de "falta de integración de litisconsorcio necesario", la apoderada del IDS manifiesta que se debe vincular a la litis tanto a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Norte de Santander, conforme lo establecido en el artículo 2 del Decreto 700 del 2013, por medio del cual se reglamentó la financiación del pasivo prestacional del sector salud y se determinó la concurrencia que asumirá la Nación y las entidades

territoriales en su condición de empleadores y sujetos pasivos de las prestaciones exigidas en la demanda.

Adicionalmente, afirma que el artículo 61 de la Ley 715 de 2001 suprimió el fondo del pasivo prestacional para el sector Salud y trasladó la responsabilidad financiera de la Nación en el pago de dicho pasivo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y a través del artículo 2 del Decreto 700 del 2013 determinó la responsabilidad que asumirá la Nación y las entidades territoriales para el pago del pasivo prestacional conforme a la determinación de las concurrencias.

El apoderado de la parte demandante, descorre el traslado del recurso de apelación interpuesto, allegando jurisprudencia para que sea tenida en cuenta e insistiendo en que el encargado de responder por las pretensiones de la demanda, es el último empleador del demandante, esto es, el IDS y si ésta entidad cree que el Gobierno Nacional le adeuda suma alguna por este concepto, lo pertinente es realizar el trámite administrativo de cobro entre tales entidades, y no someter al trabajador a la espera.

3.- CONSIDERACIONES PARA DESATAR EL RECURSO

El artículo 61 del Código General del Proceso señala que *"cuando el proceso verse sobre las relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervengan en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o contra todas"* (Negrillas fuera del texto).

Como se observa, la norma prevé la integración de todas las partes que deben intervenir dentro del proceso, siendo las mismas obligadas a responder dentro del contradictorio si así se planteara en los hechos o si el juez lo determina necesario para que sea resuelto de manera uniforme

Sobre la figura del litisconsorcio, el Consejo de Estado en la sentencia de fecha 21 de junio de 2017, con ponencia del Magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, explicó lo siguiente:

"De conformidad con el artículo 61 del código general del proceso, el litisconsorcio puede ser facultativo, cuasi necesario o necesario. La figura del litisconsorcio necesario se caracteriza, fundamentalmente, por la existencia de una única relación jurídica o de un acto jurídico respecto de los cuales existe pluralidad de sujetos o, dicho en otros términos, hay litisconsorcio necesario cuando el asunto objeto de conocimiento por parte de la jurisdicción reclama una decisión uniforme para todos los litisconsortes, titulares de la misma relación jurídica o del mismo acto jurídico que es objeto de controversia. El litisconsorcio necesario existe –como acaba de decirse– cuando hay pluralidad de sujetos que están vinculados por una única relación jurídico sustancial"

*De acuerdo a lo anterior, el litisconsorcio necesario se presenta cuando la cuestión litigiosa tiene por objeto una relación jurídica material que debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos que estén vinculados a ella"*¹. (Subraya fuera del texto original)

Sobre este punto, en el *sub exámine* la entidad demandada asegura que es necesaria la vinculación de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Norte de Santander, pues conforme a lo reglado en el Decreto 700 de 2013, por medio del cual se reglamentó los artículos 61, 62 y 63 de la ley 715 de 2001, en su artículo 1, la financiación del pasivo prestacional en salud *"causado hasta el 31 de diciembre de 1993 por concepto de cesantías y pensiones de los trabajadores del sector salud que hubieren sido reconocidos como beneficiarios"*

¹ Sentencia 2015-01056-01 de junio 21 de 2017, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera-Subsección A Rad.050012333000201501056 01 Consejero Ponente: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales.", determinando las concurrencias de éstos últimos frente al pasivo prestacional en los literales a, b y c del artículo 2 del Decreto en cita.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que la Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público asumirá el pago de las cesantías y pensiones de las personas beneficiarias del suprimido Fondo del Pasivo Prestacional para el Sector Salud en los 5 años, anteriores al 1 de enero de 1994, y de manera solidaria con las entidades territoriales.

En el caso concreto, examinando el contenido de la demanda y sus anexos, se advierte según certificación del 14 de junio de 2016², expedida por el Coordinador de Recursos Humanos del IDS, que el señor GERSON CARRILLO SALAZAR se desempeñó como servidor público del orden Nacional de la Unidad Administrativa Especial de Campañas Directas adscritas al Ministerio de Salud desde el 25 de septiembre de 1981 y que posteriormente fue incorporado al Servicio Seccional de Salud de Norte de Santander, hoy Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander (IDS), mediante Resolución 4759 del 28 de Diciembre de 1995, y actualmente se desempeña como Técnico Administrativo, código 367, Grado 08.

Así las cosas, como es claro que la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y al DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER si tendrían interés directo y podrían verse afectadas con la decisión que se adopte en el presente proceso, se considera procedente revocar la decisión del A quo, y se ordenará citar y vincular a tales entidades, a fin de garantizarles sus derechos a la defensa, debido proceso y contradicción y, en esa medida, establecer el eventual grado de responsabilidad que les pueda asistir en los hechos que son materia de controversia. Lo anterior de conformidad con el derrotero establecido por el legislador en el artículo 42 y 61 del Código General del Proceso, aplicables al asunto por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.

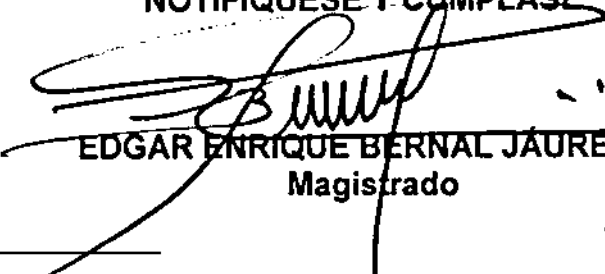
En mérito de lo anteriormente expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

RESUELVE

PRIMERO: REVÓQUESE en su totalidad el auto proferido el día 27 de Julio de 2017, en audiencia inicial adelantada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, en cuanto desestimó la excepción de falta de integración de litisconsorcio necesario, dentro del proceso de la referencia. En su lugar, CÍTESE y VINCÚLASE a la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y al DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, en calidad de litisconsorcio necesario.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen, previa las anotaciones secretariales de rigor, para que continúe con el trámite del proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI
Magistrado

² Folio 42.

PRESTADO
N° 54
2 ABR 2018



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
 San José de Cúcuta, veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-004-2015-00135-01
 Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 Accionante: Sonia Esperanza Gomez Parada
 Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Fondo de Prestaciones Sociales
 del Magisterio-Municipio de San Jose de Cucuta

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

D. X. 51
 N.º 51
 02 ABR 2018



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-004-2015-00313-01

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

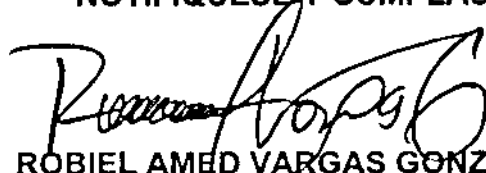
Accionante: Carmen Socorro Palencia Amorocho


Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

 + ESTADO
 N° 51
 22 ABR 2018



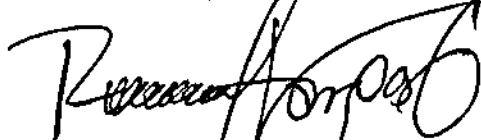
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
 San José de Cúcuta, veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-004-2015-0016801
 Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 Accionante: Maria Esperanza García Negrón
 Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Fondo de Prestaciones Sociales
 del Magisterio-Municipio de San Jose de Cucuta-
 Departamento Norte de Santander

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO


RECEBIDO
Nº 51
2 ABR 2018



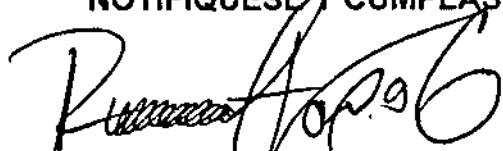
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
 San José de Cúcuta, veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

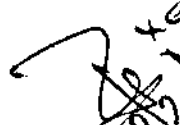
Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-004-2015-00143-01
 Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 Accionante: Marisol Guerrero Murcia
 Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Fondo de Prestaciones Sociales
 del Magisterio-Departamento Norte de Santander-
 Municipio de San José de Cúcuta

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO


 XESTADO
 N° 51
 02 ABR 2018




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
 San José de Cúcuta, veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-004-2015-00373-01
 Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 Accionante: Elizabeth Bonilla Manrique
 Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

X ESTADO
 N° 51
 22 ABR 2018



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
 San José de Cúcuta, veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-004-2015-00151-01
 Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 Accionante: Manuel Hernan Cuevas Carvajal
 Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio-Departamento Norte de Santander.

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

ESTADO
 N° 51
 02 ABR 2018



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-004-2015-00308-01

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

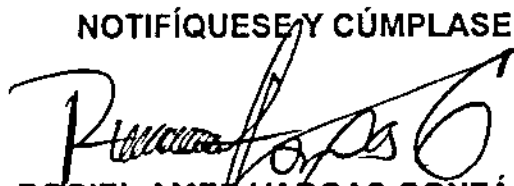
Accionante: Andrea Torcoroma Lozano Meneses

Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio-departamento Norte de Santander.

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMEL VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

X ESTADO
Nº 51.
22 ABR 2018